Imprimir

Las imágenes del auditorio de los autodenominados empresarios aplaudiendo rabiosamente a un fiscal general con índices de impunidad superiores al 94%, con cuestionamientos por corrupción, pero que usa su puesto no para combatir el crimen, sino para ladrarle al Gobierno del Cambio, resulta surrealista, u otra escena de realismo mágico.
¿Qué aplaudían esos negociantes? Porque la Fiscalía General de la Nación no traza políticas empresariales, económicas o laborales, no tasa impuestos, ni regula procesos productivos, comerciales, tecnológicos u ambientales… es más, la pregunta sería por qué invitaron al fiscal general a ese evento, cuando es un personaje de trapo y aserrín, completamente insulso. La invitación no era para escucharlo, él no tiene nada qué decir, era para ovacionarlo y convertir en un acto partidista tal asamblea. El aplauso era una declaratoria de la ANDI, despojada de industriales, como partido de oposición.

Claro que aplaudían los gruñidos de barbosita al presidente Petro, pero sobre todo aplaudían la impunidad que ese fiscal representa en el país, justo en el momento en que se visibiliza el proceso por sobornos de empresarios a funcionarios públicos, para alzarse con contratos del Estado. Esos aplausos fueron un llamado a la impunidad, a mantener “la corrupción en sus justas proporciones”, como predicaba el ideólogo de la extrema corrupción colombiana Julio César Turbay Ayala, abuelo del fatuo congresista Miguel Uribe, y para tal propósito alzan en andas al fiscalillo que ya se cree el candidato de la godarria tropical.

Varios factores confluyen para que se dé ese espectáculo en Congreso Empresarial en Cartagena. En primer lugar, está la perversión de los organismos de control en la institucionalidad colombiana que, tomada por diversas mafias, se aseguran de tener en las entidades encargadas de vigilar y controlar la criminalidad, a personajes que no persigan la criminalidad, sino a los demás partidos. Así desvirtuados los entes de control viene el segundo factor, que es el carácter anodino de los actores para la farsa: al frente de estos organismos estatales no puede haber un jurista serio, o será un pillo redomado, o será un pendejo. Entre tales perfiles han oscilado las jefaturas de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General. Y el hecho rotundo es que la corrupción administrativa comprende delitos que se cometen entre varios, donde los negociantes (privados) sobornan funcionarios

estatales (públicos), para alzarse con el erario, y donde la víctima es la ciudadanía.

El lanzamiento en Cartagena de la ANDI como partido de oposición indica que los partidos de la derecha, que tienen representación en el Congreso de la República, financiados por esos mismos negociantes que daban vítores a barbosita, no tienen la talla para ejercer tal encomienda.

La oposición al Gobierno del Cambio se la jugó toda al golpe de Estado, a evitar que el presidente Petro ejerza su mandato. Para ello ha recurrido a gritar alarmas apocalípticas sobre el efecto de las reformas, a desprestigiar el gobierno, a poner los medios de comunicación corporativos a difundir paparruchas, a soliviantar a los militares, y hasta a los paramilitares, las bandas criminales. Han fracasado estruendosamente, porque ni los jefes, ni sus voceros periodísticos tienen credibilidad. Además, la corrupción que se ha venido destapando, gracias al nuevo gobierno, y muy a pesar de la Fiscalía General, los ha expuesto de cuerpo entero como lo que son, un hatajo de salteadores de los recursos del Estado.

Los recursos que han apañado también incluyen los de las Fuerzas Armadas, donde los carteles de corrupción instaurados por esas castas politiqueras de la derecha, han lesionado a la institución militar, así como han impedido que los oficiales honestos hagan carrera dentro de las filas militares y de policía. La moralización que emprende el nuevo gobierno conviene en todo a la institución castrense, que también es consciente de cómo ellos han sido utilizados en el pasado para cometer tropelías, en favor de la cleptocracia. Por eso no son receptivos a llamados a la insubordinación para mantener privilegios de los corruptos.

Más allá de la apuesta a la subversión, la derecha macondiana se ha quedado sin recursos políticos. No tiene nada que proponer a la ciudadanía que no sea una vuelta atrás en la historia, y vender el embeleco que este país, que ellos saquearon y desangraron, estaba mucho mejor en sus manos. Esa vuelta al pasado no la han podido vender, así hayan puesto a una Vicky en cada cadena radial, y en cada periódico, menos credibilidad lograron.

También se han quedado sin dirigentes. Esas alianzas con el lumpen mafioso los han dejado

sin estadistas, convertidos en áulicos de caciques estridentes, sin iniciativa diferente a la de aplaudir a cuatro capataces. Así, para la pasada contienda electoral no tuvieron más que improvisar un candidato de entre las páginas rojas de un diario paisa, y en el parlamento no tienen sino a bocones sin fundamento, a calumniadores, o a reencauchadas figuras que más allá de matonear a los indios, a los negros, y a los maestros, nada tienen para decirle al país.

Esa casta fascistoide es tan de opereta que, como en El barbero de Sevilla, el último recurso es la calumnia. Entonces, inventan con sus vickis delitos absurdos, o siembran infundios sobre supuestos vicios del señor presidente. Todos destinados al fracaso.

En Colombia la izquierda tiene un reto enorme, el de dejar de ser oposición y aprender a gobernar, mientras que la derecha tiene el desafío de reinventarse, el uribismo no ha podido entender que ahora es oposición, y sigue actuando como si fuera un gobernante suplantado. Esa derecha sin presupuestos oficiales, y sin la nómina del Estado, debería construir una visión de país que pueda ofrecer a la ciudadanía, y abandonar el chantaje de la guerra civil.

Los negociantes, que ahora se presentan como los gremios, cometen una suplantación, pues, por gremios se debe entender a las asociaciones de profesionales, que deberían tener más peso en el devenir institucional, y representar los intereses tanto de los agremiados, como de las materias. Por ejemplo, las asociaciones de ingenieros deberían tener participación decisiva en el ordenamiento de las obras públicas, y no el sindicato de contrateros de la Cámara Colombiana de Infraestructura; o los gremios de médicos deberían retomar la conducción de la reforma a la salud; igual gremio por gremio.

Tras el acto de lanzamiento de la ANDI como partido político, la bancada del Centro Democrático en la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley para privatizar el congreso y volver a los congresistas subalternos de los empresarios. Tropicalismo político.

Los empresarios que aplauden al fiscal de la nación parecen suplicar, que antes de irse les perdonen sus culpas, aunque ellos no perdonen a los que les deben, menos al Pacto Histórico, y que no los deje caer en manos de una fiscal seria.

José Darío Castrillón Orozco

Foto tomada de: Infobae